

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00302-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por la ciudadana **MARTHA PIEDAD RINCON FORERO** identificada con cedula de ciudadanía No.20.619.666 en contra de la **NUEVA E.P.S.**

**ANTECEDENTES**

La ciudadana **MARTHA PIEDAD RINCON FORERO** identificada con cedula de ciudadanía No.20.619.666 a nombre propio inicia acción de tutela contra la **NUEVA E.P.S** por considerar que se le están vulnerando los derechos fundamentales a la **SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS E IGUALDAD Y PETICIÓN.**

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Se encuentra afiliada al sistema general de seguridad social en salud REGIMEN CONTRIBUTIVO en su calidad de cotizante trabajador independiente.

Que es una adulta mayor con 61 años de edad, de bajos ingresos y no percibe ninguna pensión por parte de Colpensiones, cotizando solo a salud en la actualidad sobre un salario mínimo legal vigente.

El día 11 de mayo de 2020, la IPS de la Nueva EPS DUMIAN MEDICAL ubicada en Girardot-Cundinamarca, le expidió incapacidad medica No. 41887464, suscrita por la Dra. Aura Esther Cárdenas Castro, por enfermedad general por hospitalización en la clínica San Rafael de Girardot- Cundinamarca, por 15 días, iniciando el 11 de mayo de 2020 y finalizando el 25 de mayo de 2020, diagnostico 5525, fractura de la epífisis inferior del radio por limitación del uso de la mano izquierda.

Que el 26 de mayo de 2020, la IPS de la Nueva EPS DUMIAN MEDICAL ubicada en Girardot-Cundinamarca, prorrogó la incapacidad medica por enfermedad general por treinta días, siendo suscrita por el traumatólogo – ortopedista Dr. Luis Francisco Restrepo Suarez, iniciando el 26 de mayo de 2020 y terminando el 24 de junio de 2020, por el diagnostico 5525, fractura de la epífisis inferior del radio por limitación del uso de la mano izquierda.

El día 23 de julio de 2020, la IPS UT Bienestar Girardot de la Nueva EPS del municipio de Girardot- Cundinamarca, expidió incapacidad por enfermedad general, por 24 días, siendo suscrita por el traumatólogo – ortopedista Dr. Gregorio Díaz iniciando el 23 de julio de 2020

y terminando el 15 de agosto de 2020, limitación en el uso de la mano izquierda pronosupinación de antebrazo izquierdo.

Indica que realizó el proceso de transcripción de las 3 incapacidades desde su celular por la app.nuevaeps.com.co y fue confirmado su recibido bajo los Nos. 64785, 64804, 67000, adjuntándose los soportes a la transcripción de la incapacidad sin ser devueltos u objetados.

Señala que la NUEVA EPS no le ha reconocido ni liquidado sus incapacidades por enfermedad general, así como tampoco se le ha notificado que ya se le pago y esta consignada en la cuenta bancaria.

Que el 12 de agosto de 2020, mediante derecho de petición enviado por correo certificado servientrega guía No. 9121785011 a la Nueva E.P.S, y recibido el 14 de agosto de 2020, solicito la liquidación, reconocimiento y pago de sus tres incapacidades por enfermedad no profesional, desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 15 de agosto de 2020, por 69 días, sin embargo, la accionada ha guardado silencio.

Manifiesta que el pago de esas incapacidades por parte de la Nueva EPS constituye la única fuente de ingreso para garantizar su subsistencia económica, debido a la fractura de la epífisis de la mano izquierda, está impedida para ejercer alguna actividad laboral, no cuenta con apoyo familiar, vive de la caridad publica de vecinos, por su avanzada edad no le prestan dinero las entidades financieras ni los prestamistas, y debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 debe permanecer en casa.

Refiere que atendiendo que es cotizante trabajadora independiente y cotiza sobre un salario mínimo mensual vigente para el año 2020, su liquidación, reconocimiento y pago de incapacidades se debe liquidar sobre el 100% del SMLMV.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales a la **SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS E IGUALDAD Y PETICIÓN** y se efectuó la liquidación, reconocimiento y pago de sus incapacidades adeudadas desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 15 de agosto de 2020.

### **PRUEBAS**

La parte accionante anexa con el escrito tutelar, los siguientes documentos:

Guía No. 9121785011 con recibido por parte de la Nueva EPS, el día 14 de agosto de 2020.

Escrito de derecho de petición del 12 de agosto de 2020, dirigido a la Nueva EPS.

Incapacidad medica No. 41887464

Incapacidad medica No. 42595606

Incapacidad medica No. 6137611

Pantallazo transcripción de incapacidad No. 64785

Pantallazo transcripción de incapacidad No.64804

Pantallazo transcripción de incapacidad No.67000

Notificación de transcripción de incapacidad y/o licencia.

Certificado cuenta corriente.

### **ACTUACIÓN PROCESAL**

1.- Admitida la tutela el 10 de septiembre de 2020, se ordenó la notificación a la **NUEVA EPS**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 11 de septiembre de 2020, se notificó a través del correo institucional del Juzgado a la **NUEVA EPS SA**, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- Dentro del término legal conferido allegó contestación la **NUEVA EPS SA**.

### **CONTESTACIÓN DE LA NUEVA EPS SA .**

La accionada refirió: “(...) El responsable del cumplimiento del fallo de tutela es el Director de Prestaciones Económicas de la NUEVA EPS, Doctor CÉSAR ALFONSO GRIMALDO DUQUE (...)

Una vez revisada la base de afiliados de NUEVA EPS, se estableció que MARTHA PIEDAD RINCON FORERO, C.C 20619666 se encuentra en estado ACTIVO en el RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.

(...) No se justifica la transitoriedad de la acción de tutela, toda vez que no se evidencia una vulneración real de un derecho fundamental que requiera atención urgente, ya que el accionante sigue afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de mi defendida y que en la actualidad cursa un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral ante la instancia respectiva (...).”.

### **CONSIDERACIONES**

#### **Aspectos preliminares**

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

#### **Naturaleza jurídica de la acción de tutela**

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima

amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

### **Procedencia de la acción de tutela.**

La ciudadana **MARTHA PIEDAD RINCON FORERO** identificada con cedula de ciudadanía No.20.619.666 se encuentra legitimada por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales **SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS E IGUALDAD Y PETICIÓN** en virtud de lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia. *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, **NUEVA EPS SA**; le correspondería según las disposiciones legales proceder al pago de las incapacidades, además, de ser el ente a quien se endilga el actuar vulnerador de los derechos invocados por la accionante.

### **Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.**

#### **DERECHO FUNDAMENTAL SEGURIDAD SOCIAL**

“El artículo 48 de la Carta Política, dispone que la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público en cabeza del Estado, que debe garantizarse a todas las personas “en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Para esta Corporación la seguridad social es un derecho de raigambre fundamental, que debe ser definido de la siguiente manera: “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus familias las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano”. (Sentencia T-043/2019).

#### **DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS.**

En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que el derecho constitucional fundamental a la vida no significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades corporales y espirituales, de manera que cualquier circunstancia que impida el

desarrollo normal de la persona, siendo evitable de alguna manera, compromete el derecho consagrado en el artículo 11 de la Constitución.(T-444/99).

## **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN.**

*“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.*

*El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).*

*La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.*

*Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar la repuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sent. T-220/94).*

*El artículo 5 del Decreto 491 de 2020, dispone: “Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.*

*En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.*

*Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.*

## **DEL CASO EN CONCRETO**

Corresponde a esta Juzgadora determinar si en la presente acción constitucional la accionada se encuentran vulnerando los derechos fundamentales a la **SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS E IGUALDAD Y PETICIÓN** de la ciudadana **MARTHA PIEDAD RINCON FORERO** identificada con cedula de ciudadanía No.20.619.666, al no proceder a reconocer, liquidar y pagar sus incapacidades Nos. 41887464, 42595606 y No. 6137611 dadas por por enfermedad general.

Junto con el escrito de la tutela se arrió escrito contentivo de derecho de petición que elevara la accionante al Director General de la Nueva EPS, mediante el cual se pretendía: “(...) 1. Solicito amablemente se me efectué con carácter urgente y prioritario el reconocimiento, liquidación y pago inmediato de mis incapacidades medicas por enfermedad general y prorrogas de la misma por sesenta y nueve días (69) días por la suma total de DOS MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$2.018.946) MONEDA CORRIENTE (...) 2. Solicito que el pago de la incapacidad liquidada se me realice consignación a mi cuenta bancaria No. 1003008538 del banco de occidente que se encuentra activa, en un plazo no mayor de los cinco (05) días hábiles contados a partir de la autorización de la liquidación de la presente prestación económica (incapacidad) por lo que la NUEVA EPS, conforme a lo ordenado en el párrafo 2 del artículo 24 del decreto 4023 de 2011”; arriándose además certificado de envío efectivo con fecha del 14 de agosto de 2020.

En el escrito de la contestación de la entidad accionada nada se dijo respecto de las solicitudes efectuadas por la accionante a través de derecho de petición a la NUEVA EPS, así como tampoco obra prueba documental de la que pueda advertirse que la accionada procedió a dar contestación al derecho de petición, por lo anterior y sin mayores consideraciones se evidencia que el actuar de la NUEVA EPS vulnera el **derecho de petición** protegido constitucionalmente; por lo que se dispondrá que dentro del término de **CUARENTA Y OCHO (48) HORAS** contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, proceda a contestar de fondo y de forma el derecho de petición incoado. Y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991.

Además, de la documental mentada obra incapacidad medica por enfermedad general No. 41887464 expedida por Dumian Medical, a nombre de Martha Piedad Rincón Forero, de 61 años de edad, de la que se lee: SERVICIO: HOSPITALARIO, FECHA DE EMISION: 2020-05-11, FECHA DE TERMINACIÓN: 2020-05-25, DURACIÓN 15 DÍAS, DIAGNOSTICO (S): S525- FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO”.

Obra, incapacidad medica No. 42595606 expedida por Dumian Medical, a nombre de Martha Piedad Rincón Forero, de 62 años de edad, de la que se lee: SERVICIO: AMBULATORIO, DIAS DE PRORROGA: 30, FECHA INICIAL PRORROGA: 2020-06-30, FECHA FINAL

PRORROGA: 2020-07-29, DIAGNOSTICO (S): S525- FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO”.

Incapacidad Nro. 6137611 expedida por la IPS UT BIENESTAR GIRARDOT, a nombre de Martha Piedad Rincón Forero, de 62 años de edad, de la que se lee: Contingencia: Enfermedad General, Días Solicitados: 24, Diagnóstico: S523, Fecha inicial: 23/07/2020, Fecha final: 15/08/2020”.

Además, se anexo transcripción de las incapacidades Nos. 64785, 64804, 67000 del que se lee: “espera respuesta en 3 días hábiles al celular o al correo registrado en la solicitud”, junto con la notificación de transcripción de incapacidad y/o licencia.

Ahora bien, respecto al pago de incapacidad laboral, ha dicho la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T- 643/14: *“Si bien por regla general las reclamaciones de acreencias laborales deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria, ha sostenido esta Corporación que la acción de tutela, de manera excepcional, resultará procedente para reconocer el pago de incapacidades médicas. **Esto, en el entendiendo que al no contar el trabajador con otra fuente de ingresos para garantizar su sostenimiento y el de las personas que dependan de él, la negativa de una E.P.S de cancelar las mencionadas incapacidades puede redundar en una vulneración a los derechos al mínimo vital, seguridad social y vida digna**, caso en el cual es imperativa la intervención del juez constitucional. También ha resaltado la jurisprudencia de la Corte, la importancia del pago de las incapacidades, como un mecanismo que garantice la adecuada recuperación del trabajador, quien no debe preocuparse por volver, de manera anticipada y poniendo en riesgo su salud, a trabajar con el objeto de ganar su sustento y el de su familia.”*. El subrayado pertenece al Juzgado.

Frente a los requisitos para el reconocimiento y pago de las incapacidades, reseño: “Los requisitos para el reconocimiento y pago de las incapacidades médicas generales, se encuentran consignados en el artículo 21 de Decreto 1804 de 1999 “Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. En dicha disposición, se establece que los trabajadores independientes tienen “(...) **derecho a solicitar el reembolso o pago de la incapacidad por enfermedad general** (...)”, siempre y cuando al momento de la solicitud y durante la incapacidad, cumplan con las siguientes reglas:

*La primera regla contaba con dos disposiciones de igual rango normativo que regulaban el mismo asunto de forma diferente. Por un lado, de acuerdo con el numeral 1º del artículo 21 del Decreto 1804 de 1999, el trabajador independiente debía haber cancelado durante el año anterior a la solicitud, de forma completa sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por otra parte, el artículo 9º del Decreto 783 de 2000, que a su vez derogó el numeral 1 del artículo 3º del Decreto 047 de 2000, dispone que “[p]ara acceder a las prestaciones económicas generadas por incapacidad por enfermedad general, los trabajadores (...) independientes deberán haber cotizado, un mínimo de cuatro (4) semanas en forma ininterrumpida y completa”.*

*La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido que, en virtud de los principios de temporalidad y favorabilidad, el requisito que deben cumplir los trabajadores independientes,*

*es haber cotizado completa e ininterrumpidamente mínimo cuatro (4) semanas antes de presentar la solicitud de pago de las indemnizaciones.*

*La segunda regla obedece al pago oportuno de los aportes antes de la solicitud de la licencia y durante el periodo de incapacidad. Así, en el numeral 1º del artículo 21 del Decreto 1804 de 1999, se establece que los aportes “(...) deberán haberse efectuado en forma oportuna por lo menos durante cuatro (4) meses de los seis (6) meses anteriores a la fecha de causación del derecho”.*

*Por su parte el numeral 2º del mismo artículo 21 dispone que “el trabajador independiente no tendrá derecho al pago de licencias por enfermedad general o maternidad o perderá este derecho en caso de no mediar el pago oportuno de las cotizaciones que se causen durante el período en que esté disfrutando de dichas licencias”.*

*La tercera regla, al igual que la segunda parte de la anterior, se encuentra consignada en el numeral 2º del artículo 21 del Decreto 1804 de 1999, de acuerdo con el cual el trabajador independiente no debe tener ninguna deuda con “(...) las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por concepto de reembolsos que deba efectuar a dichas entidades, y conforme a las disposiciones vigentes sobre restricción de acceso a los servicios asistenciales en caso de mora”.*

*De acuerdo con el numeral 3º del artículo 21, “[h]aber suministrado información veraz dentro de los documentos de afiliación y de autoliquidación de aportes al Sistema”, corresponde a la cuarta regla que debe cumplir un trabajador independiente para ejercer su derecho al pago de una incapacidad médica.*

*Finalmente, como quinto requisito, el Decreto 1804 de 1999 establece el haber cumplido “(...) con las reglas sobre períodos mínimos para ejercer el derecho a la movilidad durante los dos años anteriores a la exigencia del derecho”.*

### ***El allanamiento a la mora aplicada al reconocimiento y pago de incapacidades generales a favor de trabajadores independiente.***

*Fue a partir de la Sentencia T- 413 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra que, en virtud de la similitud existente entre las situaciones que generan el reconocimiento y pago de una incapacidad médica con el de una licencia de maternidad, esta Corporación hizo extensiva a esos casos la aplicación de la teoría del allanamiento en la mora en los siguientes términos:*

*“Si bien hasta el momento la Corporación ha aplicado la tesis del allanamiento a la mora a negativas de pago de licencia de maternidad, esta Sala de Revisión considera que tal criterio también puede ser aplicado, mutatis mutandi, cuando por la mora en el pago de los aportes en salud por parte del patrono se niega el pago de una incapacidad laboral, llegándose a afectar el mínimo vital. En esta situación se presentan tres elementos comunes a las situaciones hasta ahora contempladas por la jurisprudencia: (i) vulneración del mínimo vital del accionante por el no pago oportuno de una acreencia de tipo laboral, (ii) actuación contraria a la buena fe por parte de la entidad promotora de salud al no haber requerido oportunamente al empleador para el pago oportuno del aporte, y (iii) pago efectivo, aunque tardío, de los aportes en salud.*



*Esta similitud justifica la aplicación de la doctrina jurisprudencial desarrollada, hasta el momento, en los casos de no pago de licencia de maternidad a los casos de incapacidades laborales”.*

*Así mismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional colombiano, también ha sido reiterada en extender la figura del allanamiento a la mora a los casos de trabajadores independientes, entendiendo que si la EPS no actuó de forma clara a través de las acciones que tiene a su disponibilidad en el ordenamiento jurídico, con el fin de requerir el pago oportuno de los aportes, o no rechazó los pagos realizados por el cotizante fuera del término, no puede oponerse al pago de una incapacidad médica general, al momento en que el trabajador presenta la solicitud”.*

El Despacho advierte que la negativa del reconocimiento y pago de las incapacidades laborales por enfermedad, generan una vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, cuando se demuestra que no tiene ninguna fuente de ingresos distinta al empleo que, precisamente por encontrarse enferma, no puede realizar; considerando así, que no se trata de una reclamación económica, sino que por el contrario, la negativa de la EPS conlleva a la vulneración de derechos fundamentales como el mínimo vital, la seguridad social, la salud y la vida en condiciones dignas.

La accionante expone su situación demostrando una clara afectación a sus derechos fundamentales, lo cual justifica la intervención del juez constitucional. Sostiene “ (...) es una adulta mayor con 61 años de edad, de bajos ingresos, no percibe ninguna pensión, el pago de las incapacidades por parte de la Nueva EPS constituye la única fuente de ingreso para garantizar su subsistencia económica, debido a la fractura de la epífisis de la mano izquierda, está impedida para ejercer alguna actividad laboral, no cuenta con apoyo familiar, vive de la caridad pública de vecinos, por su avanzada edad no le prestan dinero las entidades financieras ni los prestamistas, y debido a la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 debe permanecer en casa”.

la señora **MARTHA PIEDAD RINCON FORERO** fue diagnosticada “S525- FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO” y en razón de ellos se la incapacito por 15 días, posteriormente se prorrogó su incapacidad por 30 días, y de manera posterior se la volvió a incapacitar por dicho padecimiento por una duración de 24 días.

En total, solicita la accionante que le sean pagadas las incapacidades que le fueron prescritas por el médico tratante, las cuales equivalen a 69 días.

Para el pago de las incapacidades, la accionante realizó el proceso de transcripción de las 3 incapacidades desde su celular por la app.nuevaeps.com.co y fue confirmado su recibido bajo los Nos. 64785, 64804, 67000, además de lo anterior, elevó derecho de petición ante la Nueva E.P.S, y recibido el 14 de agosto de 2020, mediante el cual solicitó la liquidación, reconocimiento y pago de sus tres incapacidades por enfermedad no profesional desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 15 de agosto de 2020, por 69 días, sin embargo, la accionada guardó silencio.

Así, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, y como quiera que no arrimo prueba alguna mediante la cual se pudiera desvirtuar la situación precaria en que se encuentra la señora **MARTHA PIEDAD RINCON FORERO**, y no habiéndose demostrado la existencia de

otros ingresos que permitieran su subsistencia digna durante el período dejado de pagar, el Despacho tutelar los derechos fundamentales invocados por la actora y, en consecuencia, ordenará al Director de Prestaciones Económicas de la NUEVA EPS, Doctor CÉSAR ALFONSO GRIMALDO DUQUE reconocer, liquidar y pagar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, las incapacidades laborales expedidas en favor de la señora **MARTHA PIEDAD RINCON FORERO**.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONCEDER** el amparo constitucional de los derechos fundamentales **SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS E IGUALDAD Y PETICIÓN** invocados por **MARTHA PIEDAD RINCON FORERO** identificada con cedula de ciudadanía No.20.619.666, conforme a la parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO: ORDENAR** a la **NUEVA EPS** que dentro del término de **CUARENTA Y OCHO (48) HORAS** contados a partir del recibo de la respectiva comunicación, proceda a contestar de fondo y de forma el derecho de petición incoado. Y remitir copia de la misma a este Despacho Judicial conforme las prescripciones del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. **Ofíciase**.

**TERCERO: ORDENAR** al Director de Prestaciones Económicas de la NUEVA EPS, Doctor CÉSAR ALFONSO GRIMALDO DUQUE reconocer, liquidar y pagar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, las incapacidades laborales expedidas en favor de la señora **MARTHA PIEDAD RINCON FORERO**. **Ofíciase**.

**CUARTO:** Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

**QUINTO:** Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

**SEXTO:** Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

**NOTIFÍQUESE,**

**Firmado Por:**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS**

**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA  
D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo  
dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6a30d907032431b7004dea0414e3d82e2e727a68f31f69e663e5c344a59d2562**

Documento generado en 23/09/2020 03:20:33 p.m.